

Señores

**JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI**

[of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

ASUNTO: **CONTESTACIÓN DEMANDA, REFORMA DE DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**  
MEDIO DE CONTROL: **REPARACIÓN DIRECTA**  
DEMANDANTES: **EDUARDO EDINSON BOLIVAR QUIMBAYA Y OTROS**  
DEMANDADO: **EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M Y OTROS**  
LLAMADOS EN GARANTÍA: **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A Y OTROS**  
RADICACIÓN: **76001333301620220011000 acumulado al 76001333300120220011100**

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del C.S. de la J., actuando en calidad de apoderado general de la compañía **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, sociedad debidamente constituida, identificada con NIT. 891.700.037-9, sometida a control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., tal como consta en el certificado de existencia y representación legal que se adjunta, comedidamente procedo, en primer lugar, a **CONTESTAR LA DEMANDA Y REFORMA DE LA DEMANDA** propuesta por el señor **EDUARDO EDINSON BOLIVAR QUIMBAYA Y OTROS**, en contra de la **EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M Y OTROS**; y en segundo lugar, a **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** realizado a la compañía **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, por parte de la referida entidad, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio, se tengan en cuenta los fundamentos fácticos y jurídicos que se exponen a continuación, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones sometidas a consideración de su despacho, de conformidad con los siguientes argumentos:

### **CAPÍTULO I. OPORTUNIDAD**

El despacho mediante Auto Interlocutorio No. 456 del 08 de agosto de 2025 resolvió admitir el llamamiento en garantía realizado por la Empresa de Transporte Masivo E.T.M a mi representada. De conformidad con los artículos 199 y 225 del CPACA el término para contestar el llamamiento en garantía es de quince (15) días, plazo que se comienza a contabilizar a los dos (2) días hábiles siguientes a la remisión del correo electrónico. En este sentido, si se tiene en cuenta, inclusive, la notificación del estado el día 11 de agosto de 2025, es correcto afirmar que nos encontramos en término para contestar la demanda y llamamiento en garantía pues el término de los quince (15) días para presentar la contestación transcurrieron los días 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 de agosto y 1 y 2 de septiembre de 2025. Por lo anterior se concluye que este escrito es presentado dentro del tiempo previsto para tal efecto.

### **CAPÍTULO II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

#### **I. FRENTE A LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA PARTE DEMANDANTE:**

**FRENTE AL HECHO “3.1.1.”:** Está compuesto por más de un hecho, por lo que se procede a contestar por separado.

De la revisión de los documentos anexados con la demanda, es cierto lo relacionado con la edad del demandante.

A mi prohijada no le consta directa o indirectamente si para la fecha del accidente Eduardo Edinson Bolívar Quimbaya se desempeñaba en labores de mensajería de manera independiente, prestando sus servicios a varias personas naturales y jurídicas de la ciudad de Cali, por lo que corresponderá acreditarlo a la parte actora de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba que permita acreditar lo referido en este hecho.

**FRENTE AL HECHO “3.1.2.”:** A mi representada no le consta directa o indirectamente este hecho, por lo que, corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, de los anexos de la demanda se observa el Informe Policial de Accidentes de Tránsito No. A001110041, en el cual se evidencia que el hecho ocurrió por la incidencia de la propia víctima, el señor Eduardo Edinson Bolívar Quimbaya, quien conducía sin licencia de conducción la motocicleta de placas IBA99D. Como hipótesis del accidente se estableció la No. 142 “semáforo en rojo para cualquiera de las partes” que significa: Pasar cuando el semáforo se encuentra en luz roja, es decir que este incumplió con las normas de tránsito y se expuso de manera imprudente a su resultado.

Cabe destacar que el Consejo de Estado ha señalado que el Informe Policial de Accidente de Tránsito es un informe meramente descriptivo, cuyo valor probatorio debe estar en armonía con otras pruebas que permitan determinar la ocurrencia de hechos.<sup>1</sup>

**FRENTE AL HECHO “3.1.3.”:** Está compuesto por más de un hecho, por lo que se procede a contestar por separado.

A mi procurada no le consta directa o indirectamente las circunstancias conocidas por el guarda Jorge Hernán Henao Gómez por ser un hecho ajeno a su conocimiento. Sin embargo, la sola ocurrencia de este hecho no implica ningún reconocimiento de responsabilidad en contra de las entidades demandadas, pues por el contrario lo único que deja ver el IPAT es la responsabilidad de la propia víctima quien es reincidente en el incumplimiento de normas de tránsito.

A mi procurada no le consta directa o indirectamente la entrevista del señor Duver Iván Moreno Moreno ni lo presuntamente relatado por el mismo, pues la declaración aportada con la demanda no fue rendida a autoridad competente, por lo tanto, le corresponderá acreditarlo a la parte actora de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba que permita acreditar lo referido en este hecho.

<sup>1</sup> Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B, Magistrado Ponente: Martín Bermúdez Muñoz. Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023 Referencia: Reparación directa Radicación: 19001-23-31-000740000-00469-01 (57259)

**FRENTE AL HECHO “3.1.4”:** No le consta a mí procurada, por ser un hecho ajeno a su conocimiento. Sin embargo, la cita coincide con la historia clínica aportada con la demanda.

**FRENTE AL HECHO “3.1.5”:** No le consta a mí procurada, por ser un hecho ajeno a su conocimiento. Sin embargo, coincide con la historia clínica aportada con la demanda.

**FRENTE AL HECHO “3.1.6”:** Está compuesto por más de un hecho, por lo que se procede a contestar por separado.

A mi procurada no le consta directa o indirectamente lo relacionado con el alta médica y la incapacidad inicial, sin embargo, coincide con la historia clínica aportada con la demanda. No obstante, la doctora Alba Elizabeth Montilla Lozada, como profesional de la medicina, quien no estuvo presente en el lugar y momento de los hechos no puede certificar un nexo causal, por lo tanto, le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

**FRENTE AL HECHO “3.1.7”:** Está compuesto por más de un hecho, por lo que se procede a contestar por separado.

A mi procurada no le consta directa o indirectamente si las demandadas se han contactado con el actor con el fin de indemnizarlo por los presuntos daños alegados, los cuales le corresponderá acreditarlos a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba que permita acreditar lo referido en este hecho.

A mi procurada no le consta directa o indirectamente los daños ocasionados al rodante en el que el actor se movilizaba, ni su cuantía, tampoco que el actor haya asumido los presuntos gastos, por lo tanto le corresponderá acreditarlo a la parte actora de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba que permita acreditar lo referido en este hecho, pues los documentos aportados como facturas no cumplen con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, el cual establece los elementos fundamentales para la validez de una factura.

A mi poderdante no le consta que el citado vehículo es usado como medio de transporte personal y herramienta de trabajo del señor Eduardo Edinson Bolivar Quimbaya por lo tanto, le corresponderá acreditarlo a la parte actora de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba que permita acreditar lo referido en este hecho.

**FRENTE AL HECHO “3.1.8”:** Está compuesto por más de un hecho, por lo que se procede a contestar por separado.

A mi poderdante no le consta cuáles eran las condiciones previas de movilidad del accionante antes del

accidente, máxime cuando en la propia demanda se reconoce que el señor presentaba paraplejia con anterioridad a los hechos que nos convocan. Del mismo modo, tampoco le consta que, por causa del material de osteosíntesis, el actor no pueda caminar de manera independiente o por tramos largos, ni que persista una herida abierta que limite su recuperación, por lo tanto, este hecho le corresponderá acreditarlo a la parte actora conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba que permita acreditar lo referido en este hecho.

De igual manera, no le consta a mi representada que como consecuencia, actor haya quedado imposibilitado para ejercer su presunta actividad económica, ni que dicha actividad hubiese financiado, antes del accidente, sus gastos de manutención y los de su cónyuge y dos hijos con quienes afirma convivir, por lo que la existencia de esa actividad económica, sus ingresos, la dependencia económica alegada y el núcleo familiar le corresponderá acreditarlo a la parte actora conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba que permita acreditar lo referido en este hecho.

**FRENTE AL HECHO “3.1.9”:** A mi representada no le consta directa o indirectamente este hecho pues esta relacionando a un tercero diferente al asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M. En caso, se evidencia que no existió ninguna acción u omisión por parte del ETM en los hechos que nos convocan.

## **II. FRENTE A LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA PARTE DEMANDANDA:**

**FRENTE AL HECHO “3.2.1”:** Está compuesto por más de un hecho, por lo que se procede a contestar por separado.

A mi prohijada no le consta directa o indirectamente si para la fecha del accidente Eduardo Edinson Bolívar Quimbaya se desempeñaba en labores de mensajería de manera independiente, prestando sus servicios a varias personas naturales y jurídicas de la ciudad de Cali ni la suma devengada por este oficio, por lo que, corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba que permita acreditar lo referido en este hecho.

En cuanto a las demás afirmaciones contenidas en este hecho, relativas a la supuesta omisión de la Administración Municipal, a la conducta del conductor del bus y a las consecuencias personales, familiares y económicas alegadas por el actor, no le constan a mi representada y, en consecuencia, deberán ser acreditadas por la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que en el expediente no se advierte prueba idónea que soporte lo referido, pues de los anexos de la demanda se observa el Informe Policial de Accidentes de Tránsito No. A001110041, en el cual se evidencia la imprudencia del conductor Eduardo Edinson Bolívar Quimbaya por conducir sin licencia de conducción, quien además que es reincidente, lo que evidencia una irresponsabilidad e impericia en el manejo de vehículos automotores.

**FRENTE AL HECHO “3.2.2”:** Lo narrado en este numeral no constituye un hecho, sino que corresponde a fundamentos jurídicos, valoraciones subjetivas y apreciaciones personales de la parte actora frente a la normatividad de tránsito y a las presuntas omisiones de la administración municipal, así como a la conducta desplegada por el conductor del vehículo de transporte masivo. En consecuencia, tales afirmaciones deberán ser acreditadas por la parte actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba que permita acreditar lo referido en este hecho.

### **III. FRENTE AL CAPÍTULO DE “CONDENAS PRINCIPALES”**

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones deprecadas por el apoderado judicial de la parte actora, en tanto no ha logrado probar los elementos estructurales de la responsabilidad que le pretende atribuir al asegurado (EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M) y a los demás demandados. Para lograr mayor precisión frente a los requerimientos de la demanda, a los cuales me opongo, me refiero a cada pretensión así:

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “2.1”** Respetuosamente manifiesto que, **ME OPONGO** rotundamente a que se declare patrimonial y extracontractualmente responsable a la **EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M** porque en el caso *sub-examine* no se configuraron los elementos estructurales de la responsabilidad, y por el contrario, se evidencia la culpa de la víctima por su imprudencia en el ejercicio de la conducción.

Lo anterior, por cuanto no se tiene acreditada la imputación en contra de la **EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M.** No existe prueba en el proceso que sirva para determinar que la causa eficiente del daño que se pretende indemnizar con esta acción sea atribuible a alguna vulneración de la entidad accionada a su contenido obligacional.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “2.2”:** Me opongo rotundamente a cualquier condena en contra de las demandadas de cancelar a favor de los demandantes cualquier suma de dinero, en razón a que la acción y los medios de prueba en que se fundamenta, no acreditan en ninguna medida la responsabilidad patrimonial y extracontractual de las pasivas. Por el contrario, se evidencia la culpa de la víctima Eduardo Edinson Bolivar Quimbaya la que ocasionó el hecho que aquí se reclama, pues conducía sin licencia, no respetó la señal de tránsito al pasar un semáforo en rojo y desconoció las precauciones exigidas por el Código de Tránsito relacionadas con la prelación de las vías.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “2.2.1 PERJUICIOS MORALES”** Bajo el entendido de que no se tiene acreditada la responsabilidad de la entidad demandada, tampoco es posible acceder a las pretensiones encaminadas a indemnizar por concepto de “*perjuicios morales*” al demandante por el monto solicitado.

Adicionalmente la parte demandante no allegó ningún elemento de convicción objetiva que permitiera determinar la causación de esta tipología de perjuicio ni la gravedad de la lesión supuestamente sufrida el día 30 de diciembre de 2019, por cuanto con anterioridad a los hechos el actor presentaba paraplejía. Es decir, no existe en el expediente un dictamen de pérdida de capacidad laboral realizado por la junta que

permita establecer el porcentaje de la gravedad de la lesión presuntamente padecida en los hechos ocurridos el día 30 de diciembre de 2019 y así determinar el valor de los perjuicios morales, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado y por el contrario resultan exorbitantes, de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales fijados por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014., para la tasación de los perjuicios morales en caso de lesiones.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “2.2.2 PERJUICIOS MATERIALES”:** Me opongo rotundamente a cualquier condena en contra de las demandadas de cancelar a favor de los demandantes cualquier suma de dinero, en razón a que la acción y los medios de prueba en que se fundamenta, no acreditan en ninguna medida la responsabilidad patrimonial y extracontractual de las pasivas. Al plenario no se aportaron elementos probatorios que demuestren que el actor desarrollara actividad económica alguna, ni que constituyera el sustento de su núcleo familiar. Por el contrario, lo que se evidencia es la concurrencia de la culpa exclusiva de la víctima, quien desatendió las señales de tránsito existentes en el lugar de los hechos, circunstancia que excluye cualquier responsabilidad a la Empresa de Transporte Masivo E.T.M.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “2.2.3 DAÑO EMERGENTE”:** Me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio, bajo el entendido de que no se tiene acreditada la responsabilidad de la entidad demandada, tampoco es posible acceder a las pretensiones encaminadas a indemnizar por concepto de daño emergente.

Adicionalmente, las erogaciones que pretenden fundamentar esta pretensión, no se encuentran plenamente acreditadas. Respecto a los DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000), por concepto de honorarios de abogado para representación en proceso penal, no se acredita que efectivamente el demandante hubiera afectado su patrimonio por este concepto. Además, se solicita en favor del abogado penalista JOSE EDGAR OTALORA URREA, que ni siquiera aparece vinculado como uno de los demandantes del proceso, por lo que no cuenta con legitimación por pasiva en el presente asunto.

En particular, para el reconocimiento de honorarios pagados a profesionales del derecho, el H. Consejo de Estado ha precisado que no basta con solicitar su reconocimiento, sino que debe aportar factura o su documento equivalente para su acreditación:

“[L]a Sala Plena de la Sección Tercera, mediante sentencia de 18 de julio de 2019, al unificar su jurisprudencia en orden a definir criterios en torno al reconocimiento y a la liquidación del perjuicio material, señaló que, **tratándose de honorarios profesionales prestados por abogados, la factura o su documento equivalente es la prueba idónea para demostrar el pago.** [...] Así las cosas, se reitera que el artículo 177 del C.P.C. establecía que “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, por manera que era una carga procesal de la parte actora demostrar el daño que le habría causado la entidad demandada y como no cumplió con dicha carga, la consecuencia de su falencia no puede ser otra que la negación de las súplicas de la demanda”.<sup>2</sup>

En ese sentido, al no acreditar de manera alguna los egresos irrogados mediante las pruebas conducentes y pertinentes para el caso, no cabe otra alternativa que negar lo pretendido.

<sup>2</sup> CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 25000-23-2-ARCM-2011-00376-01(46559)A

Por otra parte, respecto al pago de presuntos daños ocasionados al rodante en el que se movilizaba Eduardo Edinson el día del accidente, cuyos gastos ascendieron a la suma de \$1'500.000, en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba que permita acreditar lo referido en este hecho, pues los documentos aportados como facturas no cumplen con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, el cual establece los elementos fundamentales para la validez de una factura. En todo caso, aun si se diera por acreditado algún gasto, no resulta procedente su reconocimiento, puesto que fue la conducta de la víctima Eduardo Edinson Bolivar Quimbaya la que ocasionó el hecho que aquí se reclama, pues conducía sin licencia, no respetó la señal de tránsito al pasar un semáforo en rojo y desconoció las precauciones exigidas por el Código de Tránsito relacionadas con la prelación de las vías, lo que conlleva a destacar que nadie puede alegar daños por su propia culpa.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “2.2.4.1. LUCRO CESANTE CONSOLIDADO”:** Me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio, ya que no está demostrado que el actor para la época del supuesto accidente ejerciera una actividad productiva ni el monto que devengaba en razón a ello, puesto que no allegó ningún elemento de convicción que permitiera establecer la existencia de una relación laboral, de prestación de servicios, de forma independiente o que acreditará el valor de sus ingresos. En este sentido, el Consejo de Estado ya ha manifestado que no se admite presunción el ejercicio de un oficio, por lo que, al no existir prueba de ello, mucho menos de su contraprestación, no será posible acceder a dicha pretensión.

Adicionalmente, la solicitud debe tener fundamento en una pérdida de capacidad laboral, en este caso del afectado, y además, debe fundarse en la existencia de una ganancia cierta **que se dejó de percibir** como consecuencia del daño, y propiamente en el daño; pues sin que todo ello en conjunto esté determinado, no es posible atribuir ninguna clase de procedencia de indemnización de este tipo, pues como bien lo explica el Consejo de Estado<sup>3</sup> *“el lucro cesante hace referencia a la ganancia **que deja de percibirse**, o la expectativa cierta económica de beneficio o provecho que no se realizó como consecuencia del daño”*. (Subrayado y negrillas fuera del texto original).

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “2.2.4.2. LUCRO CESANTE FUTURO”:** Me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio, ya que no está demostrado que el actor para la época del supuesto accidente ejerciera una actividad productiva ni el monto que devengaba en razón a ello, puesto que no allegó ningún elemento de convicción que permitiera establecer la existencia de una relación laboral, de prestación de servicios, de forma independiente o que acreditará el valor de sus ingresos. En este sentido, el Consejo de Estado ya ha manifestado que no se admite presunción el ejercicio de un oficio, por lo que, al no existir prueba de ello, mucho menos de su contraprestación, no será posible acceder a dicha pretensión.

Adicionalmente, la solicitud debe tener fundamento en una pérdida de capacidad laboral, en este caso del afectado, y además, debe fundarse en la existencia de una ganancia cierta **que se dejó de percibir** como consecuencia del daño, y propiamente en el daño; pues sin que todo ello en conjunto esté determinado, no es posible atribuir ninguna clase de procedencia de indemnización de este tipo, pues como bien lo explica el Consejo de Estado<sup>4</sup> *“el lucro cesante hace referencia a la ganancia **que deja de percibirse**, o*

<sup>3</sup> Sentencia Rad. 00526 de 2016, Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, C.P. William Hernández Gómez

<sup>4</sup> Sentencia Rad. 00526 de 2016, Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, C.P. William Hernández Gómez

*la expectativa cierta económica de beneficio o provecho que no se realizó como consecuencia del daño”.*  
(Subrayado y negrillas fuera del texto original).

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “2.2.4 DAÑO PSICOLÓGICO”:** ME OPONGO rotundamente a esta pretensión, por cuanto, el “*daño psicológico*”, no se encuentra dentro de la tipología indemnizatoria que para efectos de reparación ha establecido el Consejo de Estado. Bajo este entendido, e incluso bajo el hipotético caso de que lo solicitado por la parte actora en este punto sea una indemnización por daño a la salud. El máximo órgano jurisdiccional ha establecido baremos claros respecto a los topes indemnizatorios para este rubro.

De esta manera, la pretensión resultaría improcedente, pues no se acreditó cuál es la gravedad de las lesiones padecidas por el señor Eduardo Edinson Bolivar Quimbaya en los hechos ocurridos el día 30 de diciembre de 2019, puesto que no se allegó ningún dictamen de pérdida de capacidad laboral o medio de prueba que permitiera determinarlo de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que, cualquier declaración o tasación resultaría totalmente subjetiva. Además, no puede perderse de vista que el señor Bolívar ya presentaba una incapacidad física previa, de manera que los perjuicios actuales no son atribuibles a las entidades demandadas, y en todo caso, no es posible reconocer más de una indemnización por un mismo concepto.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “3.2.5 DAÑO A LA SALUD”** Respetuosamente manifiesto que, **ME OPONGO** rotundamente, a esta pretensión, por cuanto, no se tiene acreditada la imputación en contra de la **EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M.** No existe prueba en el proceso que sirva para determinar que la causa eficiente del daño que se pretende indemnizar con esta acción sea atribuible a alguna vulneración de la entidad accionada a su contenido obligacional.

Bajo este entendido, el máximo órgano jurisdiccional ha establecido baremos claros respecto a los topes indemnizatorios para este rubro

De esta manera, la pretensión resultaría improcedente, pues no se acreditó cuál es la gravedad de las lesiones padecidas por el señor Eduardo Edinson Bolivar Quimbaya en los hechos ocurridos el día 30 de diciembre de 2019, puesto que no se allegó ningún dictamen de pérdida de capacidad laboral o medio de prueba que permitiera determinarlo de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que, cualquier declaración o tasación resultaría totalmente subjetiva. Además, no puede perderse de vista que el señor Bolívar ya presentaba una incapacidad física previa, de manera que los perjuicios actuales no son atribuibles a las entidades demandadas, y en todo caso, no es posible reconocer más de una indemnización por un mismo concepto.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “3.2.6 PERJUICIO POR LA ALTERACIÓN GRAVE DE LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA”:** ME OPONGO rotundamente, a esta pretensión, por cuanto esta tipología no se encuentra dentro de la tipología indemnizatoria que para efectos de reparación ha establecido el Consejo de Estado.

Bajo este entendido, e incluso bajo el hipotético caso de que lo solicitado por la parte actora en este punto sea una indemnización por daño a la salud, el máximo órgano jurisdiccional ha establecido baremos claros respecto a los topes indemnizatorios para este rubro; los cuales, ya fueron citados en los anteriores puntos.

De esta manera, la pretensión resultaría improcedente, pues no se acreditó cuál es la gravedad de las lesiones padecidas por el señor Eduardo Edinson Bolivar Quimbaya, puesto que no se allegó ningún dictamen de pérdida de capacidad laboral o medio de prueba que permitiera determinarlo de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que, cualquier declaración o tasación resultaría totalmente subjetiva. y en todo caso, no puede haber más de una indemnización por el mismo rubro.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “3.3”:** ME OPONGO ROTUNDAMENTE por cuanto se trata de una pretensión accesoria a las principales; que únicamente procedería en el caso remoto de una sentencia condenatoria en contra de la entidad accionada. En el presente caso, tal escenario no se configura, pues la decisión final deberá ser la de negar las pretensiones de la parte actora, razón por la cual esta solicitud deberá desestimarse.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “3.4”:** ME OPONGO ROTUNDAMENTE por cuanto se trata de una pretensión accesoria a las principales; que únicamente procedería en el caso remoto de una sentencia condenatoria en contra de la entidad accionada. En el presente caso, tal escenario no se configura, pues la decisión final deberá ser la de negar las pretensiones de la parte actora, razón por la cual esta solicitud deberá desestimarse.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “3.5”:** ME OPONGO ROTUNDAMENTE por cuanto se trata de una pretensión accesoria a las principales; que únicamente procedería en el caso remoto de una sentencia condenatoria en contra de la entidad accionada. En el presente caso, tal escenario no se configura, pues la decisión final deberá ser la de negar las pretensiones de la parte actora, razón por la cual esta solicitud deberá desestimarse.

### **CAPÍTULO III. EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA**

En el presente acápite se presentarán los fundamentos de hecho y de derecho que en general, sustentan la oposición a las pretensiones de la demanda y que en particular dan cuenta de que el extremo activo no ha probado, como es su deber, la existencia de todos los supuestos normativos de la presunta responsabilidad patrimonial que pretende endilgarle a la parte demandada en este litigio. Se sustenta la oposición a las pretensiones invocadas por el extremo activo de este litigio, de conformidad con las siguientes excepciones:

## **1. HECHO EXCLUSIVO Y DETERMINANTE DE LA VÍCTIMA COMO CONSTITUYENTE DE UNA CAUSA EXTRAÑA**

La conducta de la víctima Eduardo Edinson Bolívar Quimbaya fue determinante en el accidente que nos convoca, ya que se encontraba ejerciendo una actividad peligrosa en contravía de las normas que regulan su desarrollo al i) conducir sin licencia de conducción, ii) hacer caso omiso a la señal horizontal de pare y iii) omitir las precauciones exigidas por el Código de Tránsito relacionadas con la prelación de las vías.

Sobre la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad, el Consejo de Estado en su Sección Tercera, mediante sentencia del 25 de julio de 2002 (expediente 13.744), se ha pronunciado de la siguiente manera:

“(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto, puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. **Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor ..., quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (...)**” (Negrillas fuera del texto original)

En particular, frente al grado de diligencia y cuidado exigido en el ejercicio de actividades peligrosas, indicó:

**“Quien conduce debe prever que aun aquellos eventos derivados de la imprudencia o inobservancia de los demás, ello tiene su límite en la razonable probabilidad del peligro y por ello no puede pretenderse del conductor la previsión de la remota posibilidad; a él se le exige es una actitud síquica en la que prevea aquellos sucesos que se presentan con notorio grado de probabilidad, es decir, en lo que la ocurrencia del daño a un interés jurídico puede ser evitado con su contribución activa; más allá de este límite su conducta se desplaza a lo fortuito o a la fuerza mayor”.**<sup>5</sup> (Negrillas fuera del texto original)

Teniendo en cuenta lo anterior, los actores de la vía están sujetos a una serie de normas contenidas en el Código Nacional de Tránsito, como se extrae de su artículo 55°:

“ARTÍCULO 55. COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR, PASAJERO O PEATÓN. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y **debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables**, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito.” (Negrillas fuera del texto original)

En particular, los conductores están sometidos a obligaciones especiales que se relacionan con la actividad que desempeñan, como las contenidas en el artículo 17 y 18 del Código Nacional de Tránsito relacionadas con la naturaleza habilitadora de las licencias de conducción de vehículos, la cual se sujeta a las categorías y restricciones en ella establecidas:

**ARTÍCULO 17. OTORGAMIENTO.** La Licencia de conducción será otorgada por primera vez a quien cumpla con todos los requisitos descritos en el artículo 19 de este código, por la entidad pública o privada autorizada para el efecto por el organismo de tránsito en su respectiva jurisdicción.

El formato de la licencia de conducción será único nacional, de conformidad con la ficha técnica

<sup>5</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo- Consejero Ponente: Juan De Dios Montes Hernández, en sentencia del 09 de diciembre de 1996, proferida dentro del expediente con radicado No. 9722,

que establezca el Ministerio de Transporte, incorporando como mínimo el nombre completo del conductor, fotografía, número del documento de identificación, huella y tipo de sangre, fecha de nacimiento, categorías autorizadas, **restricciones**, fechas de expedición y de vencimiento y organismo de tránsito que la expidió. (...)

**ARTÍCULO 18. FACULTAD DEL TITULAR.** La licencia de conducción **habilitará a su titular para conducir vehículos automotores** de acuerdo con las categorías que para cada modalidad establezca la reglamentación que adopte el Ministerio de Transporte, estipulando claramente si se trata de un conductor de servicio público o particular. (Negritas fuera del texto original)

Por otra parte, Ley 769 de 2002, establece unos parámetros para conocer la prelación de tránsito:

**“ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES.** Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:(...) Vía principal: Vía de un sistema con prelación de tránsito sobre las vías ordinarias. Vía ordinaria: La que tiene tránsito subordinado a las vías principales.

Así mismo indica los deberes de los conductores que transiten en una vía sin prelación:

**“ARTÍCULO 66. GIROS EN CRUCE DE INTERSECCIÓN. El conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce y donde no haya semáforo tomará las precauciones debidas e iniciará la marcha cuando le corresponda.**

En ningún caso el conductor podrá detener su vehículo sobre la vía férrea, un paso peatonal o una intersección o un carril exclusivo, paralelo preferencial de alimentadores o compartidos con los peatonales, pertenecientes al STTMP. Todo conductor deberá permanecer a una distancia mínima de cinco (5) metros de la vía férrea.”

El hecho que motiva este medio de control sucedió en el cruce de la Carrera 15 con la Calle 18 de Santiago de Cali. Según los hechos narrados en la demanda, el señor Eduardo Edinson Bolivar Quimbaya se encontraba circulando por la Calle 18 en el momento de la colisión.

En este sentido es importante recalcar que, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, la Carrera 15 es una vía principal, que tiene prelación de circulación sobre las vías ordinarias, como la Calle 18, que tiene tránsito subordinado a las vías principales. Lo anterior, es fácilmente comprobable, al verificar, que la Carrera 15 es una vía con dos calzadas, con un total de seis carriles, siendo dos de éstos, destinados al transporte público. Mientras que la Calle 18, cuenta con un solo carril, en un único sentido de circulación, como da cuenta el Informe Policial de Accidentes de Tránsito No. A001110041 aportado con la demanda:

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS		7.5 SUPERFICIE DE RODADURA		MATERIAL ORGÁNICO		D. SEÑALES HORIZONTALES		F. DELINEADOR DE PISO	
VÍA 1	VÍA 2	VÍA 1	VÍA 2	VÍA 1	VÍA 2	VÍA 1	VÍA 2	VÍA 1	VÍA 2
<b>7.1 GEOMETRICAS</b>		<b>7.6 ESTADO</b>		<b>7.8 ILUMINACIÓN ARTIFICIAL</b>		<b>E. REDUCTOR DE VELOCIDAD</b>		<b>7.10 VISIBILIDAD</b>	
A RECTA	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENO	<input checked="" type="checkbox"/>	A. CON BUENA	<input checked="" type="checkbox"/>	BANDAS SONORAS	<input checked="" type="checkbox"/>	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>
B. CURVA	<input checked="" type="checkbox"/>	CON HUECOS	<input checked="" type="checkbox"/>	B. SIN MALA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	DISMINUIDA POR	<input checked="" type="checkbox"/>
C. PLANO	<input checked="" type="checkbox"/>	DERRUMBRES	<input checked="" type="checkbox"/>	C. SEMÁFORO	<input checked="" type="checkbox"/>	MÓVIL	<input checked="" type="checkbox"/>	CASETAS	<input checked="" type="checkbox"/>
D. PENDIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	EN REPARACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	A. OPERANDO	<input checked="" type="checkbox"/>	FLUJO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSTRUCCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
E. BAHÍA DE ESTACIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FUNDIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	B. INTERMITENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	SONORIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	VALLAS	<input checked="" type="checkbox"/>
F. CON BARRERA	<input checked="" type="checkbox"/>	INUNDADA	<input checked="" type="checkbox"/>	C. CON DAÑOS	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTOPEROL	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL/VEGETACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
G. UTILIZACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	PARCHADA	<input checked="" type="checkbox"/>	A. AFAGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRO	<input checked="" type="checkbox"/>	VEHICULO ESTACIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>
H. UN SENTIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	PIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	B. OCULTO	<input checked="" type="checkbox"/>			ENCANALAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
I. Doble sentido	<input checked="" type="checkbox"/>	RESURADA	<input checked="" type="checkbox"/>	C. SEÑALES VERTICALES	<input checked="" type="checkbox"/>			POSTE	<input checked="" type="checkbox"/>
J. REVERSIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	A. PARE	<input checked="" type="checkbox"/>			OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>
K. CONTRAFLUJO	<input checked="" type="checkbox"/>	HUMEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	B. CEDA EL PASO	<input checked="" type="checkbox"/>				
L. VÍA CALZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	LODO	<input checked="" type="checkbox"/>	C. NO GIRE	<input checked="" type="checkbox"/>				
M. DOS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCANTARILLA DESTAPADA	<input checked="" type="checkbox"/>	D. SENTIDO VIAL	<input checked="" type="checkbox"/>				
N. TRES O MAS	<input checked="" type="checkbox"/>			E. VELOCIDAD MÁXIMA	<input checked="" type="checkbox"/>				
O. VARIABLE	<input checked="" type="checkbox"/>			F. OTRA	<input checked="" type="checkbox"/>				
P. UNO	<input checked="" type="checkbox"/>			G. NINGUNA	<input checked="" type="checkbox"/>				
Q. DOS	<input checked="" type="checkbox"/>								
R. TRES O MAS	<input checked="" type="checkbox"/>								
S. VARIABLE	<input checked="" type="checkbox"/>								

Así mismo se evidencia en la siguiente imagen satelital panorámica de Google Maps donde aprecian las características del lugar del hecho el cual corresponde a la carrera 15 con calle 18 en la ciudad de Cali:



En este sentido, le era exigible al señor Eduardo Edinson Bolívar Quimbaya guardar las medidas de precaución establecidas en la Ley 769 de 2002, en el sentido de detener su marcha y continuar únicamente en el momento en que no existiera ningún peligro al avanzar, teniendo en cuenta que el vehículo de transporte público de placas VCQ 864 conducido por Carlos Alberto Rebellón Calderón contaba con prelación en la vía.

De ello es posible colegir que el señor Eduardo Edinson Bolívar Quimbaya falló en el deber objetivo de cuidado porque no tuvo la prudencia requerida para transitar con las precauciones exigidas por el Código Nacional de Tránsito, exponiéndose a un riesgo mayúsculo.

Ello se explica porque el señor Eduardo Edinson Bolívar Quimbaya nunca ha obtenido licencia de conducción que lo habilite para conducir motocicletas, requisito mínimo exigido por el ordenamiento jurídico para garantizar que quienes circulan en las vías públicas cuentan con la formación y capacitación necesaria para hacerlo de manera segura. Esta circunstancia pone en evidencia la falta de idoneidad del actor para conducir este tipo de vehículos, exponiendo no solo su propia integridad, sino la de los demás actores viales:

NOMBRE COMPLETO:	EDUARDO EDINSON BOLIVAR QUIMBAYA		
DOCUMENTO:	C.C. 16641931	ESTADO DE LA PERSONA:	ACTIVA
ESTADO DEL CONDUCTOR:	NO TIENE LICENCIA	NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	19178759
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/08/2019		
 Licencia(s) de conducción			
No se encontró información registrada en el RUNT.			

Aunado a lo anterior, se constató que el señor Bolívar Quimbaya registra múltiples comparendos por infracciones de tránsito, tal como lo reporta el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito –SIMIT–,<sup>6</sup> lo que refleja un patrón reiterado de desconocimiento y falta de respeto por las normas que rigen la circulación vial, presentando cerca de 49 multas que ascienden a más de \$55.000.000.

### Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

Q

**Resumen**

EDU\*\*\*\* EDI\*\*\*\*      Comparendos: **3**      Multas: **49**      Acuerdos de pago: **0**

Cédula: **16641931**      Total: **\$ 55.199.241**

Estado de cuenta

[Guardar estado](#)

Cursos viales

[Ver historial \(0\)](#)

#### Comparendos y Multas

Mostrar 5

Tipo	Notificación	Placa	Secretaría	Infracción	Estado	Valor	Valor a pagar	
<a href="#">76001000000026308484</a> <b>Comparendo</b> <small>Fecha imposición: 30/12/2019</small>	No aplica	IBA99D	Cali	D01...	Pendiente <small>No tiene curso</small>	\$ 828.120	\$ 868.320 <small>Detalle Pago</small>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">76001000000050311190</a> <b>Comparendo</b> <small>Fecha imposición: 16/07/2025</small>	13/08/2025	IBA99D	Cali	C35... <small>Fotodetección</small> <a href="#">Proyección pago</a>	Pendiente <small>No tiene curso</small>	\$ 603.930	\$ 644.130 <small>Detalle Pago</small>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">76001000000050311191</a> <b>Comparendo</b> <small>Fecha imposición: 16/07/2025</small>	13/08/2025	IBA99D	Cali	D02... <small>Fotodetección</small> <a href="#">Proyección pago</a>	Pendiente <small>No tiene curso</small>	\$ 1.207.860	\$ 1.248.060 <small>Detalle Pago</small>	<input type="checkbox"/>

Anterior
1
2
3
4
5
6
Siguiente

Total (52): \$ 55.199.241

Ello cobra relevancia al observar que entre las infracciones más frecuentes por parte del señor Eduardo se encuentran las relacionadas con **no respetar las señales de tránsito, pasarse los semáforos en rojo y desatender las señales de “PARE”**, precisamente como se evidenció en el presente caso:

#### Información comparendo

No. comparendo	Fecha	Hora	Dirección	Comparendo electrónico
76001000000050212274	29/05/2025	10:31:00	CARRERA 46 CON CALLE 36	S
Fecha notificación	Fuente comparendo	Secretaría	Agente	
19/06/2025	No reportada	Cali (76001000)	Desconocido Desconocido	

#### Infracción

Código	Descripción	Valor
D04	No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de PARE o un semáforo intermitente en rojo.	\$ 1.207.860

#### Datos conductor

Tipo documento	Número documento	Nombres	Apellidos
Cédula	1664****	EDU**** EDI****	BOL**** QUIM****
Tipo de infractor	Motociclista		

#### Información vehículo

Placa	No. Licencia del vehículo	Tipo	Servicio
IBA99D	0000000000000000	MOTOCICLETA	Oficial

<sup>6</sup> <https://www.fcm.org.co/simit/#/estado-cuenta?numDocPlacaProp=16641931>

**Información comparendo**

No. comparendo 76001000000048886910	Fecha 22/05/2025	Hora 07:50:00	Dirección CALLE 23 CON CARRERA 23	Comparendo electrónico S
Fecha notificación 31/05/2025	Fuente comparendo No reportada	Secretaría Cali (76001000)	Agente Desconocido Desconocido	

**Infracción**

Código	Descripción	Valor
D04	No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de PARE o un semáforo intermitente en rojo.	\$ 1.207.860

**Datos conductor**

Tipo documento Cédula	Número documento 1664****	Nombres EDU**** EDI****	Apellidos BOL**** QUIM****
Tipo de infractor Motociclista			

**Información vehículo**

Placa IBA99D	No. Licencia del vehículo 0000000000000000	Tipo MOTOCICLETA	Servicio Oficial
-----------------	---	---------------------	---------------------

De ello es más que evidente la falta de aptitud del señor Eduardo Edinson Bolívar Quimbaya para la conducción de motocicletas, pues nunca ha obtenido licencia de conducción que lo habilitara para realizar dicha actividad, lo que de entrada desvirtúa su idoneidad para operar un vehículo de estas características. Aunado a ello, se encuentra demostrado su sistemático incumplimiento de las normas de tránsito, reflejado en la multiplicidad de comparendos registrados en el SIMIT, dentro de los cuales se destacan de manera reiterada las conductas de irrespetar señales de tránsito, pasarse los semáforos en rojo y desconocer las señales de "PARE". Este patrón de infracciones pone de manifiesto no solo un peligro para sí mismo, sino también para los demás actores viales.

En tal contexto entonces es procedente concluir que las lesiones que manifiesta haber sufrido el señor Eduardo Edinson Bolívar Quimbaya son el resultado de dejar al azar su seguridad y de no adoptar las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes. Bajo esta premisa, es claro que la causa eficiente del daño no corresponde ni puede ser atribuida a la falla en el servicio alegada, sino exclusivamente a la falta de cumplimiento de deberes legales y a la ausencia de precaución en el deber objetivo de cuidado, pues de haberse adoptado las medidas de seguridad obligatorias en materia de tránsito como lo es respetar la prelación de vías, el hecho dañoso no se habría configurado.

Lo anterior permite concluir que la causa determinante del accidente fue la actitud imprudente del señor Eduardo Edinson Bolívar Quimbaya, quien, pese a encontrarse realizando una actividad peligrosa no guardó la mínima prudencia y cuidado debido, transgrediendo de manera directa las normas de tránsito. Por tal motivo, se procede a colegir que el conductor de la motocicleta fue el único responsable de la ocurrencia del accidente de tránsito, por cuanto ejercía la actividad de conducción sin licencia, con un comportamiento reiterado como infractor de las normas viales y en franca trasgresión del deber objetivo de cuidado, configurándose de esta manera un hecho determinante de un tercero como causal que exime de toda responsabilidad al extremo pasivo.

En este sentido, al acreditarse una culpa exclusiva de la víctima, no es posible conceder una declaratoria de la responsabilidad, por lo que, solicito al señor Juez declarar probada esta excepción.

## **2. SUBSIDIARIA: REDUCCIÓN DE LA EVENTUAL INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA INCIDENCIA DE LA CONDUCTA DEL SEÑOR EDUARDO EDINSON BOLIVAR QUIMBAYA / CONCURRENCIA DE CULPAS**

De manera subsidiaria, sin que implique aceptación de responsabilidad por parte de mi representada y considerando que sin lugar a duda la conducta de la víctima influyó en el resultado dañoso y, de no estimarse que esta fue la causa adecuada del mismo, se deberá analizar la concurrencia de culpas a luz de lo dispuesto por el artículo 2357 del Código Civil, que contempla: *“La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”*.

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha dicho:

“Sobre el tema de la concausa, esta Corporación ha sostenido que **el comportamiento de la víctima habilita al juzgador para reducir el cuántum indemnizatorio (artículo 2357 del Código Civil) en la medida en que la misma hubiere dado lugar al daño; es decir, cuando la conducta de los perjudicados participa de manera cierta y eficaz en el desenlace del resultado**. Tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado, una vez configurados los elementos estructurales –daño antijurídico, factor de imputación y nexo causal–, la conducta del perjudicado solamente puede tener relevancia como factor de aminoración del cuántum indemnizatorio, a condición de que su comportamiento adquiera las notas características para configurar una co-causación del daño”<sup>7</sup>. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En igual sentido dice el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, en sentencia que ya se citó anteriormente, que:

**(...) incluso, una participación parcial de la víctima en los hechos en modo alguno determina la producción del daño, sino que podría de manera eventual conducir a estructurar una concausa y, por lo tanto, a reconocer una proporcionalidad en la materialización del mismo y en su reparación**. Así las cosas, si la culpa de la víctima es causa parcial (concausa) en la producción del daño, esta circunstancia puede constituir un factor de graduación del perjuicio, todo lo cual dependerá del grado de participación de la propia persona afectada en la concreción de los hechos que son objeto de análisis<sup>8</sup>. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Entonces, de los argumentos antes señalados se deriva la relevancia de la participación de la víctima en la causación del daño debido a la falta de cumplimiento de deberes legales y a la ausencia de precaución en el deber objetivo de cuidado, pues de haberse adoptado las medidas de seguridad obligatorias en materia de tránsito —como portar licencia de conducción y respetar la prelación de vías como lo es respetar la prelación de vías, el hecho dañoso no se habría configurado, por lo que su participación deberá considerarse en mayor al **90%**.

En conclusión, sea o no la causa adecuada del daño, lo cierto es que la conducta de la víctima incidió directa y determinantemente en la causalidad de los hechos materia de debate, de manera que, de no eximir de responsabilidad a la entidad demandada, deberá ser objeto de valoración para que se reduzca la remota condena en contra de ella.

## **3. INSUFICIENCIA PROBATORIA PARA ESTRUCTURAR LA IMPUTACIÓN COMO ELEMENTO DE RESPONSABILIDAD.**

<sup>7</sup> CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Rad. 19256 del 7 de abril de 2011, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Bogotá - Cra 11A No. 94A-25 Of. 201 Edificio 94<sup>a</sup>

<sup>8</sup> Sentencias de 1<sup>o</sup> de octubre de 2007, exp. 15567, de 4 de diciembre de 2007, exp. 16894, y 20 de febrero de 2008, exp. 16696; sentencia de 23 de abril de 2008, exp. 16235, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Cali - Av 6A Bis #35N-100, Of. 212 Centro Empresarial Chipchape +57 315 577 6200 - 602-6594075

Encontrándonos dentro del régimen subjetivo de la responsabilidad, la parte demandante del proceso tiene en su cabeza la carga probatoria, de forma que, es aquel extremo procesal, el encargado de comprobar los supuestos de hecho y las consideraciones que se presentaron inicialmente con el escrito de la demanda. Sin embargo, se reitera que, no existe material probatorio que permita estructurar los elementos de la responsabilidad que se pretende atribuir a la EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M.

Lo anterior, al no encontrarse en la demanda, pruebas que acrediten el nexo de causalidad entre alguna acción u omisión de la EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M y el daño que se pretende indemnizar, en este caso, las lesiones padecidas por el señor Eduardo Edinson Bolívar Quimbaya.

Con el material probatorio aportado con el escrito de demanda, no es posible atribuir la responsabilidad del daño a la entidad demandada, como quiera que aún no se tiene probada la imputación como elemento de la responsabilidad, toda vez que se constituyó la culpa exclusiva de la víctima como causal de exclusión de la responsabilidad que se pretende endilgar contra la EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M.

Respecto a la causa eficiente del accidente de tránsito, únicamente se aporta por parte de la demandante el IPAT No. A001110041, en el que se evidencia que la culpa exclusiva de la víctima y que fue su actuar irresponsable e imprudente la que ocasionó el hecho pues se pasó el semáforo en rojo y omitió las precauciones exigidas por el Código de Tránsito en las situaciones de intersecciones en las que no hay semáforo, así como el orden de prelación de las vías y la evidente la falta de aptitud del señor Eduardo Edinson Bolívar Quimbaya para la conducción de motocicletas, pues nunca ha obtenido licencia de conducción que lo habilitara para realizar dicha actividad, lo que de entrada desvirtúa su idoneidad para operar un vehículo de estas características.

Frente al valor probatorio del Informe Policial de Accidentes de Tránsito, la postura jurisprudencial del Tribunal Administrativo del Valle ha sido pacífica, al indicar que este no acredita por sí solo la causa de un accidente, tal como se observa a continuación:

“Así entonces, **el informe policial de accidente de tránsito y su aclaración por sí solos no permiten determinar que el hueco en la vía haya sido la causa eficiente y única del daño;** las demás pruebas obrantes en el plenario como la historia clínica, los testimonios, los dictámenes periciales de la Junta Regional de Calificación del Valle y del Instituto de Medicina Legal, analizados en conjunto no permiten a la Sala tener certeza acerca de cuál fue la causa eficiente del daño, específicamente determinar si el accidente se causó por la existencia de un hueco en la vía, o por la culpa exclusiva de la víctima, pues dichos elementos probatorios solo indican la ocurrencia del accidente, la causación del daño y de algunos perjuicios a los demandantes pero no el nexo causal”.<sup>9</sup> (Negrilla y subrayado fuera del texto).

“En este punto conveniente es precisar, **que la parte actora achaca como causa eficiente del accidente de tránsito ocurrido el 31 de mayo de 2015, a un hueco existente en la vía, soportando su aseveración en el referido informe de tránsito, sin embargo, no puede pasarse por alto que se trata de una hipótesis; luego dicho informe por sí solo no constituye prueba suficiente de dicha aseveración,** para ello se necesitaba de otras pruebas como las testimoniales, empero, los testimonios en este asunto solo rindieron declaración sobre las relaciones afectivas de la víctima con los demás demandantes”.<sup>10</sup> (Negrilla y subrayado fuera del texto).

“Con lo anterior, logra la Sala colegir que efectivamente la señora Laura Marcela Moreno Abelardi padeció un accidente de tránsito el día 05 de octubre de 2017, mientras conducía su motocicleta por la altura de la carrera 56 con calle 12, cuando presuntamente cayó por culpa de unos huecos en la vía, que en el informe de accidente de tránsito y croquis suscrito por el funcionario que

9 Sentencia del 22 de agosto de 2019. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Zoranny, Castillo, Ojalora. Radicación No. 76001333301320140019801.

10 Sentencia del 10 de julio de 2021. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Fernando Augusto García Muñoz. Radicación No. 76001333300620160009403.

atendió la eventualidad, se dejó constancia de la existencia de huecos en la vía que transitaba la víctima, **no obstante, esta Corporación no puede determinar fehacientemente que la causa del daño haya sido el mal estado de la vía, esto es, la presencia de huecos en ella, toda vez que si bien se acreditó la existencia de los huecos, en el informe, mas no hay certeza de ello, máxime que no hubo testigo presencial de los hechos u otra prueba que pruebe que efectivamente fue la causa del accidente.**<sup>11</sup>

“En este orden de ideas, se concluye que el informe policial de accidente de tránsito es un documento que: i) es susceptible de valoración judicial, ii) no constituye prueba pericial, sino documental cuya autenticidad se presume, pero admite prueba en contrario, **iii) no constituye prueba única y unívoca del accidente sino descriptiva de las condiciones halladas in situ, por lo cual su valoración debe ser conjunta con las demás pruebas y bajo las reglas de la sana crítica.**”<sup>12</sup> (Negrilla y subrayado fuera del texto)

Lo anterior cobra sentido al considerar que las circunstancias ahí plasmadas tienen el carácter de una hipótesis estimada por el agente que diligencia el Informe, quien por regla general no presencia directamente el accidente, como ocurre en el presente caso, y por ende dicho Informe no puede ser considerado de manera aislada, como ha precisado el H. el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia del 12 de abril de 2024:

“Es importante precisar que **las hipótesis que se consignan en los correspondientes informes del accidente de tránsito aluden a una posible causa “estimada” por el agente de tránsito quien deduce la causa del evento a partir de lo observado en la escena del siniestro, mas no un hecho debidamente probado, dado que, en muchos casos, como en el presente, la autoridad de tránsito no presencia directamente el accidente, sino que arriba al lugar en un tiempo posterior a la ocurrencia de este.**”<sup>13</sup> (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Por lo argüido anteriormente, ni la hipótesis ni el contenido del informe, puede entenderse como plena prueba de la causa eficiente del hecho, ya que no representan el momento preciso de la ocurrencia del accidente ni las condiciones particulares que se pudieron dar para ello.

En este sentido, mientras no se tiene acreditada la imputación en contra de la EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M, al no obrar prueba alguna que demuestre que la causa eficiente del accidente de tránsito fue alguna omisión o acción de la entidad demandada; y por el contrario, sí obra en el expediente material probatorio suficiente que encamina la causa efectiva del daño hacia la culpa exclusiva de la víctima por las circunstancias anotadas, configurándose una causa extraña que excluye la responsabilidad de las entidades demandadas.

La causa extraña excluyente de responsabilidad requiere de presupuestos estructurales para su configuración, los cuales se concretan en su imprevisibilidad, irresistibilidad, exclusividad y exterioridad en relación con la entidad a quien se pretende imputar el daño; esto es, **para que una causa extraña pueda exonerar completamente de responsabilidad al ente demandado, es necesario que jurídicamente se le pueda calificar como la fuente exclusiva del daño desde la teoría de la causalidad adecuada; en otras palabras, que haya sido determinante para su producción.**<sup>14</sup>

Así, no habiéndose acreditado el nexo causal entre alguna presunta violación de contenido obligatorio por parte de la EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M y el daño que se reclama, no es posible determinar ningún tipo de responsabilidad en contra de la entidad demandada; mucho menos cuando, en sentido contrario, sí existen pruebas que permitan deducir que la causa efectiva del daño, recae en la

11 Sentencia del 30 de septiembre de 2022. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Jhon Erick Chaves Bravo. Radicación No. 76001333300220190026301. Bogotá - Cra. 14A No. 94-23 Of. 211

12 Sentencia del 30 de mayo de 2025. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Juan Pablo Dossman Cortés. Radicación No. 76001-33-33-003-2017-00215-01 Edificio 94<sup>a</sup> Call - Av 6A Bis #35N-100, Of. 212

13 Sentencia del 12 de abril de 2024. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. M.P. Freddy Ibarra Martínez. Radicación No. 19001333170120100035801 (59.914) Centro Empresarial Chipichape

<sup>14</sup> Sección tercera del Consejo de Estado. Sentencia del 24 de abril de 2024. C.P. NICOLÁS YEPES CORRALES. Radicado Número. 20001233100020120026701 (53584) Sección Tercera, Subsección B

conducta de quien se presenta como demandante en el proceso, por lo que se configura la culpa exclusiva de la víctima como una causal de exoneración de responsabilidad.

#### 4. FALTA DE ACREDITACIÓN PROBATORIA DE LOS PERJUICIOS Y EXAGERADA TASACIÓN DE LOS MISMOS

La parte demandante no demostró la existencia de los perjuicios materiales e inmateriales que solicita, pues (i) no aportó el dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por la Junta de Calificación de Invalidez que permita determinar la existencia del daño físico y su gravedad, (ii) no aportó ningún tipo de material probatorio que permita establecer que la víctima ejercía una actividad económica al momento de los hechos y que dejó de percibir ingresos desde ese momento y la causa de estos y (iii) no acredita la causación y cuantía de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales solicitados.

- **Frente a los perjuicios morales**

La parte actora solicitó a título de indemnización por los perjuicios morales la suma de 100 SMLMV. Sin embargo, los perjuicios morales solicitados por la parte demandante resultan exorbitantes, de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales fijados por el Consejo de Estado, para la tasación de los perjuicios morales en caso de lesiones. Esto pues, ha dicho el órgano de cierre que para la reparación del daño moral en casos en los que se alega una lesión antijurídica producto de una acción u omisión de un agente del estado, puntualmente hablando de daños como lesiones físicas ocasionadas con ocasión de responsabilidad administrativa, los valores procedentes son los siguientes:

Tabla 2. Reparación del daño moral en caso de lesión

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES					
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	NIVEL 1 Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	NIVEL 2 Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	NIVEL 3 Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	NIVEL 4 Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.	NIVEL 5 Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5

En el presente caso, la parte actora está solicitando como indemnización por concepto de perjuicios morales el tope máximo legal, sin que haya acreditado dentro del proceso la gravedad de las lesiones presentadas. En efecto, no se allegó un Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral emitido por la Junta de Calificación ni otro medio de prueba idóneo que permita establecer el porcentaje de afectación derivado del accidente ocurrido el 30 de diciembre de 2019, pues, debe resaltarse que el demandante ya padecía una condición de paraplejía, circunstancia expresamente reconocida en la propia demanda, de manera que no puede pretenderse indemnización por perjuicios morales desligados de la patología de incapacidad preexistente.

#### 3.2. HECHOS RELACIONADOS CON LA PARTE CONVOCADA

3.2.1. Hasta el día del accidente, el señor EDUARDO EDINSON BOLIVAR QUIMBAYA, **a pesar de su limitación de paraplejía** llevaba una vida normal,

Por lo anterior, resulta improcedente la pretensión en los términos formulados, en tanto carece de sustento probatorio y desconoce la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado.

En ese sentido, al momento de esta contestación, la pérdida de capacidad laboral demostrada por la parte actora es cero (0), por lo que no podría ubicarse el directamente afectado en ninguno de los rangos establecidos por el órgano de cierre de lo contencioso administrativo, motivo por el cual, los valores pretendidos resultan claramente exagerados y consecuentemente improcedentes.

Ahora bien, más allá de la delimitación en abstracto de las sumas procedentes según qué casos y qué tipo de lesión, no se puede perder de vista que el daño o lesión a reparar al que se hace referencia, no es un daño cualquiera, debe tratarse indefectiblemente de un daño antijurídico para que proceda la correspondiente indemnización, al respecto dice Eduardo García de Enterría y Tomas Ramón Fernández Rodríguez<sup>15</sup>:

La lesión a la que se refiere la cláusula constitucional y legal es otra cosa, sin embargo. Para que exista lesión en sentido propio no basta que perjuicio exista un perjuicio material, una pérdida patrimonial; **es absolutamente necesario que ese perjuicio patrimonial sea antijurídico, antijuridicidad en la que está el fundamento, como ya notamos, del surgimiento de la obligación reparatoria.** (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Y como en el caso que nos ocupa es evidente que el daño alegado por la parte actora es uno que no puede predicarse como antijurídico, dada la configuración de los medios exceptivos ya argumentados en apartes anteriores, es claro que no puede proceder reparación alguna sobre este aspecto.

No obstante, si en el remoto e improbable caso, el despacho considera que sí existen los elementos para determinar la procedencia de la indemnización, esta deberá obedecer a los topes establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, y en atención única y exclusivamente a lo efectivamente demostrado en el proceso.

- **Frente al daño a la salud**

La parte actora solicita a título de indemnización por el perjuicio del daño a la salud a la víctima directa la suma de 100 SMMLV, sin aportar ningún elemento objetivo que permita su tasación, por lo que termina siendo meras especulaciones y expectativas sin sustento probatorio. Máxime cuando, no se allegó un Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral emitido por la Junta de Calificación ni otro medio de prueba idóneo que permita establecer el porcentaje de afectación derivado del accidente ocurrido el 30 de diciembre de 2019, pues, debe resaltarse que el demandante ya padecía una condición de paraplejía, circunstancia expresamente reconocida en la propia demanda, de manera que no puede pretenderse indemnización por perjuicios morales desligados de la patología de incapacidad preexistente.

### **3.2. HECHOS RELACIONADOS CON LA PARTE CONVOCADA**

**3.2.1.** Hasta el día del accidente, el señor EDUARDO EDINSON BOLIVAR QUIMBAYA, **a pesar de su limitación de paraplejía** llevaba una vida normal,

Frente al daño a la salud, el Consejo de Estado en Sentencia del 3 de abril de 2020, radicación 05001-23-

<sup>15</sup> García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomas Ramón, Curso de derecho administrativo, t.II, 14 edición, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015, p. 378

31-000-2011-00421-01 (49426), explicó que existen dos componentes del perjuicio derivado del daño a la salud, estos son: i) un componente objetivo (la gravedad de la lesión padecida) que se establece con el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo (la naturaleza de la lesión padecida) que permite incrementar, según la regla de excepción, el valor reconocido en el componente objetivo.

Como vemos, el daño a la salud también se reconoce dependiendo de la gravedad o levedad de la lesión, sin embargo, para el caso concreto, no está acreditado la gravedad del daño sufrido el señor Eduardo Edinson Bolívar Quimbaya, puesto que no se allegó ningún dictamen de pérdida de capacidad laboral que permitiera determinarlo u otro medio de prueba idóneo de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que, cualquier declaración o tasación resultaría totalmente subjetiva, lo que hace improcedente el reconocimiento solicitado en la demanda.

Adicionalmente, no se puede perder de vista que el daño o lesión a reparar al que se hace referencia, no es un daño cualquiera, debe tratarse indefectiblemente de un daño antijurídico para que proceda la correspondiente indemnización, y, como en el caso que nos ocupa es evidente que el daño alegado por la parte actora es uno que no puede predicarse como antijurídico, dada la configuración de los medios exceptivos ya argumentados en apartes anteriores, es claro que no puede proceder reparación alguna sobre este aspecto en el caso particular

No obstante, si en el remoto e improbable caso, el despacho considera que sí existen los elementos para determinar la procedencia de la indemnización, esta sólo podrá ser reconocida a la víctima y deberá obedecer a los topes establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, y en atención única y exclusiva a lo efectivamente demostrado en el proceso.

- **Frente al “daño psicológico”**

La parte actora solicita a título de indemnización por “*daño psicológico*” la suma de 100 SMMLV, el cual no se encuentra dentro de la tipología indemnizatoria que para efectos de reparación ha establecido el Consejo de Estado. Bajo este entendido, e incluso bajo el hipotético caso de que lo solicitado por la parte actora en este punto sea una indemnización por daño a la salud. El máximo órgano jurisdiccional ha establecido baremos claros respecto a los topes indemnizatorios para este rubro; los cuales se resumen en el siguiente cuadro:

<b>GRAFICO</b>	
<b>REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD</b>	
<b>REGLA GENERAL</b>	
<b>GRAVEDAD DE LA LESIÓN</b>	<b>Víctima directa</b>
	<b>SMLMV</b>
Igual o superior al 50%	100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10

De esta manera, la pretensión resultaría improcedente, pues no se acreditó cuál es la gravedad de las lesiones padecidas por el señor Eduardo Edinson Bolívar Quimbaya, puesto que no se allegó ningún dictamen de pérdida de capacidad laboral o medio de prueba que permitiera determinarlo de conformidad

con la jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que, cualquier declaración o tasación resultaría totalmente subjetiva. y en todo caso, no puede haber más de una indemnización por el mismo rubro.

- **Frente a la alteración grave de las condiciones de existencia:**

La parte actora solicita a título de indemnización por este supuesto perjuicio la suma de 100 SMMLV, el cual no se encuentra dentro de la tipología indemnizatoria que para efectos de reparación ha establecido el Consejo de Estado. Bajo este entendido, e incluso bajo el hipotético caso de que lo solicitado por la parte actora en este punto sea una indemnización por daño a la salud. El máximo órgano jurisdiccional ha establecido baremos claros respecto a los topes indemnizatorios para este rubro; los cuales se resumen en el siguiente cuadro:

<b>GRAFICO</b>	
<b>REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD</b>	
<b>REGLA GENERAL</b>	
<b>GRAVEDAD DE LA LESIÓN</b>	<b>Víctima directa</b>
	<b>SMLMV</b>
Igual o superior al 50%	100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10

De esta manera, la pretensión resultaría improcedente, pues no se acreditó cuál es la gravedad de las lesiones padecidas por el señor Eduardo Edinson Bolívar Quimbaya, puesto que no se allegó ningún dictamen de pérdida de capacidad laboral o medio de prueba que permitiera determinarlo de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que, cualquier declaración o tasación resultaría totalmente subjetiva. y en todo caso, no puede haber más de una indemnización por el mismo rubro.

- **Frente al Lucro Cesante Consolidado y Futuro**

Respecto de las sumas y criterios que se exponen en el capítulo sobre lucro cesante, salta a la vista que sus resultados carecen de una liquidación objetiva, pues podemos ver que se usan como criterios base de liquidación, aspectos hipotéticos o desacertados como el ingreso mensual sobre el cual calcular la pérdida, pues se observa que la demanda sugiere que el valor que se relaciona se dejó de percibir desde el momento del accidente, cuando no existe prueba alguna de que el demandante perdiera dicho ingreso a causa de los hechos, pues no demostró que el señor Eduardo Edinson Bolívar Quimbaya para la época del accidente ejerciera una actividad productiva, ya que no allegó ningún elemento de convicción que permitiera establecer la existencia de una relación laboral, de prestación de servicios, de forma independiente o que acreditará el valor de sus ingresos.

Es menester precisar que el Consejo de Estado en sentencia de unificación reciente del 10 de julio de 2019,<sup>16</sup> limitó todas las posibles discusiones que se pudieran derivar de este perjuicio y eliminó la presunción de que toda persona en edad productiva devenga al menos un salario mínimo, en cuanto

<sup>16</sup> Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2019. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicación No. 73001-23-31-000-2009-00133-01(44572).

contrariaba con uno de los elementos, esto es, la certeza exigida para conceder dicha indemnización, de manera que estableció que el lucro cesante solo sería reconocido cuando obren las pruebas suficientes que lo acrediten.

En este sentido, es necesario recordar que el perjuicio del lucro cesante ha sido entendido como uno de naturaleza material, económico, de contenido pecuniario y que consiste en la afectación de un derecho patrimonial reflejado en la ganancia o ingreso **que se ha dejado de percibir** a causa del daño padecido; pues sin que todo ello en conjunto esté determinado, no es posible atribuir ninguna clase de procedencia de indemnización de este tipo, pues como bien lo explica el Consejo de Estado<sup>17</sup> *“el lucro cesante hace referencia a la ganancia **que deja de percibirse**, o la expectativa cierta económica de beneficio o provecho que no se realizó como consecuencia del daño”*. (Subrayado y negrillas fuera del texto original).

En consecuencia, el lucro cesante no puede constituirse sobre conceptos hipotéticos o simples conjeturas que no están justificadas en posibilidades ciertas y objetivas y mucho menos en datos equívocos. De manera que resulta como deber indispensable de la parte demandante, acreditar el ingreso que la víctima **dejó de percibir** al momento de la ocurrencia del daño, pero todo esto basado en medios de convicción ciertos y no meramente especulativos.

En definitiva, resulta claro que no es posible reconocer ningún perjuicio a título de lucro cesante (consolidado o futuro), en cuanto la parte demandante sustentó sus pretensiones en datos erróneos y meras suposiciones, pero no allegó ningún medio probatorio que permitiera demostrar que el presunto afectado dejó de percibir una remuneración como consecuencia del hecho que se alega, sin que haya acreditado la relación laboral que alega ni que haya dejado de percibir ingresos a causa del accidente, por lo que cualquier indemnización de este perjuicio, en el caso puntual, resultaría insostenible y exagerada.

- **Frente al daño emergente:**

Las erogaciones que pretenden fundamentar esta pretensión, no se encuentran plenamente acreditadas. Respecto a los DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000), por concepto de honorarios de abogado para representación en proceso penal, no se acredita que efectivamente el demandante hubiera afectado su patrimonio por este concepto. Además, se solicita en favor del abogado penalista JOSE EDGAR OTALORA URREA, que ni siquiera aparece vinculado como uno de los demandantes del proceso, por lo que no cuenta con legitimación por pasiva en el presente asunto.

Al respecto cabe recordar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión de los artículos 211 y 306 de la ley 1437 de 2011, las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

En particular, para el reconocimiento de honorarios pagados a profesionales del derecho, el H. Consejo de Estado ha precisado que no basta con solicitar su reconocimiento, sino que debe aportar factura o su documento equivalente para su acreditación:

“[L]a Sala Plena de la Sección Tercera, mediante sentencia de 18 de julio de 2019, al unificar su jurisprudencia en orden a definir criterios en torno al reconocimiento y a la liquidación del perjuicio

<sup>17</sup> Sentencia Rad. 00526 de 2016, Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, C.P. William Hernández Gómez

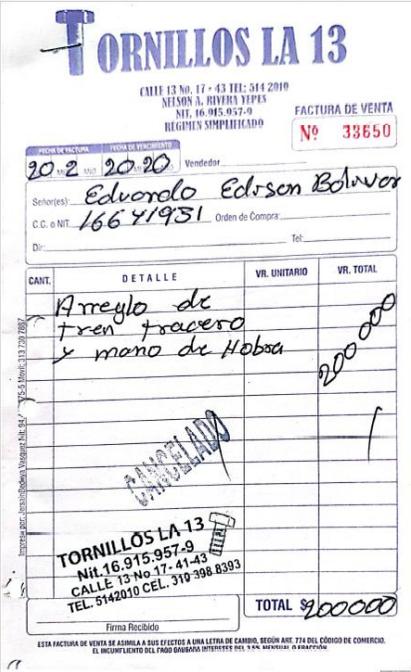
material, señaló que, tratándose de honorarios profesionales prestados por abogados, la factura o su documento equivalente es la prueba idónea para demostrar el pago. [...] Así las cosas, se reitera que el artículo 177 del C.P.C. establecía que “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, por manera que era una carga procesal de la parte actora demostrar el daño que le habría causado la entidad demandada y como no cumplió con dicha carga, la consecuencia de su falencia no puede ser otra que la negación de las súplicas de la demanda”.<sup>18</sup>

Por otra parte, respecto al pago de presuntos daños ocasionados al rodante en el que se movilizaba Eduardo Edinson el día del accidente, cuyos gastos en total, luego del pago de grúas y parqueadero, más reparación de daños, ascendió a la suma de Un Millón quinientos mil pesos (\$1'500.000), en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba que permita acreditar lo referido en este hecho, pues los documentos aportados como facturas no cumplen con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, el cual establece los elementos fundamentales para la validez de una factura.

**“ARTICULO 617. REQUISITOS DE LA FACTURA DE VENTA.** Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:

- a. Estar denominada expresamente como factura de venta.
- b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
- c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
- d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
- e. Fecha de su expedición.
- f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
- g. Valor total de la operación.
- h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
- i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.”

En este orden de ideas, los siguientes documentos no cumplen con alguno de los requisitos que trata el artículo 617 del Estatuto Tributario:

<u>No.</u>	<u>Documentos</u>	<u>Observación</u>
1		El documento no cumple con los requisitos b,c, f, h, i.

<sup>18</sup> CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 25000-23-2AFCC-2011-00376-01(46559)A

<p>2</p>	<p><b>MOTOS RUVERS</b> RENE GILBERTO CEPEDA R. - RUT 16.751.162-5 Calle 70 No. 7.Bis-41 Bv. Alfonso López Teléfono: 662 1371 - Celular: 310 894 3095 Cali - Colombia</p> <p>Cliente: <b>EDUARDO EDISON BOLIVAR</b> NIT: <b>16.641.931</b> Dirección: <b>Urb. D. de N. de C. 100 N. de C.</b></p> <p>FACTURA DE VENTA N° <b>0378</b> Fecha: <b>22/02/20.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REFERENCIA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>* CAMBIO BARRAS Y RETENES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* CAMBIO DIRECCION</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* ENGRASE CUERPO DIRECCION</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* REVISION GUAJAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* REVISION COMANDO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>\$</td> <td><b>150000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>MOTOS RUVERS Mecánica en General 2 y 4 Tiempos Calle 70 No. 7.Bis-41 Bv. Alfonso López Teléfono: 662 1371 - Celular: 310 894 3095 Cali - Colombia</p> <p>Observaciones: Este factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según art. 774 del Código de Comercio.</p> <p>Valor TOTAL: <b>\$150000</b></p>	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			* CAMBIO BARRAS Y RETENES					* CAMBIO DIRECCION					* ENGRASE CUERPO DIRECCION					* REVISION GUAJAS					* REVISION COMANDO						\$	<b>150000</b>	<p>El documento no cumple con los requisitos a, b, c, h, i.</p>
REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																	
		* CAMBIO BARRAS Y RETENES																																			
		* CAMBIO DIRECCION																																			
		* ENGRASE CUERPO DIRECCION																																			
		* REVISION GUAJAS																																			
		* REVISION COMANDO																																			
			\$	<b>150000</b>																																	
<p>3</p>	<p><b>CDAV</b> MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE NIT: 890.311.425-0</p> <p>SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN No. 800076 de Diciembre 01 de 2018 ACTIVADO FIDUCIARIA CA 257 TABAFA 1061 895 NO TOMAR AUTORES FRENOS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA REFORMA CONDON</p> <p><b>COMPROBANTE DE INGRESO</b> No. <b>SA 115747</b></p> <p>FECHA TRÁMITE: 20/01/2020 PLACA: TBA99D</p> <p>PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 01/01/2020 - 31/12/2020</p> <p>RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS: <b>DAVID BOLIVAR ARANA</b></p> <p>IDENTIFICACION: <b>1143832783</b></p> <p>CODIGO: <b>CRA17 #16 34 B/BELALCAZAR</b></p> <p>CONCEPTO: <b>433002020453</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REVISIÓN DE ACCIDENTES</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CDAV</td> <td>25,462</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>4,838</td> </tr> <tr> <td><b>VALOR TOTAL</b></td> <td><b>30,300</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>VALOR EN LETRAS: <b>TREINTA MIL TRES CIENTOS PESOS</b></p> <p>LUZ ANYELY BECERRA ESQUIVEL</p> <p>SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RES DIAN 10738 - FECHA 22 DIC/2020 CALLE 70 NORTE No. 38 - 81 - PISO - FAX: 604 44 24 - A.A. 807208 - CALI - COLOMBIA www.dian.com.co/usuarios/009.00 2. USUARIO</p>	REVISIÓN DE ACCIDENTES	VALOR	CDAV	25,462	IVA	4,838	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>30,300</b>	<p>El documento no cumple con los requisitos a, b, c, h, i.</p>																											
REVISIÓN DE ACCIDENTES	VALOR																																				
CDAV	25,462																																				
IVA	4,838																																				
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>30,300</b>																																				

4

El documento no cumple con los requisitos a, b, c, h, i.

**CDAV**  
MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE  
Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali

**Comprobante de Ingreso**

FECHA DE TRÁMITE  
DÍA MES AÑO HORA 16 1 2020 9:41 85917385

No. 5789156

DÍA	MES	AÑO	AL	DÍA	MES	AÑO
16	1	2020	16	1	2020	

PLACA	MARCA	CLASE	MODELO	OTROS DATOS

NT O C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN
18-41931	EDUARDO EDINSON BOLIVAR OUMBACHA	A 17 # 16-34 B BELALCAZAR

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR	PARTICIPACIONES
ICU 32	Caja banco contrav	14.600	STTM 292.551.60
	Tabulados contrav	14.600	FIDE PST154.106.70
	Intereses registrados en AP	9.995	STTM-L 7696.596.70
	Pago Cuota Acuerdo de Pago	414.060	
	Conceptos varios Acuerdo 32	0	

VALOR EN LETRAS: TOS CINCUENTA Y TRES MIL QUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

TOTAL: 453.255

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

FAVOR RECLAMAR EL TRÁMITE A PARTIR DE: 16/1/2020

ELABORADO POR: QUEZ CHAVEZ

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. DIAN 10738 - FECHA 22 DIC 2000

Programa **SERVICIOS DE TRÁNSITO** Seguridad y agilidad

En virtud de lo anterior, en el remoto caso que el despacho considere reconocer el daño emergente, solicito respetuosamente tener en cuenta las anteriores observaciones con la finalidad de que los documentos sean excluidos y el valor reconocido sea menor al solicitado por la parte actora.

En ese sentido, al no acreditar de manera alguna los egresos irrogados mediante las pruebas conducentes y pertinentes para el caso, no cabe otra alternativa que negar lo pretendido.

**5. EXCEPCIONES PLANTEADAS POR QUIEN FORMULÓ EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A MI REPRESENTADA.**

Coadyuyo las excepciones propuestas por la **EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M** solo en cuanto las mismas no perjudiquen los intereses de mí representada, ni comprometan su responsabilidad.

**6. GENÉRICA O INNOMINADA.**

Solicito al señor juez decretar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, que se encuentre originada en la Ley o en el contrato por el cual se convocó a mi representada, incluida la de la prescripción del contrato de seguro. Lo anterior, conforme a lo estipulado en el inciso segundo del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establece: “

“(…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y **sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada**. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.” (subrayado y negritas propias).

En ese sentido, cualquier hecho que dentro del proceso constituya una excepción deberá reconocerse de manera oficiosa en la sentencia que defina el mérito.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción

## **CAPITULO IV. CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR LA EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M**

### **I. FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

Los hechos del llamamiento en garantía se refieren a los hechos de la demanda, por lo que no es necesario pronunciarse nuevamente sobre los mismos. No obstante, sí se debe recalcar lo siguiente, si bien existieron dos contratos de seguro entre la EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M con MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A que se identifican con los siguientes datos:

- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507217000004; cuya vigencia corrió desde el 3 de enero de 2019 hasta el 3 de enero de 2020, la cual opera en exceso de la primaria de automóviles con la que se cuente, es decir que su cobertura solo opera una vez se haya agotado en su totalidad la póliza primaria de automóviles que ampare el riesgo.
- Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507119000102; cuya vigencia corrió desde el 4 de enero de 2019 hasta el 3 de enero de 2020.

Estos por sí solos no ofrece cobertura automática. Se deben cumplir con las condiciones particulares y generales de la póliza. Además de tener en cuenta que el contrato de seguro puede verse afectado por fenómenos como la ineficacia del llamamiento, materialización de exclusiones o de la prescripción de las acciones ordinarias o extraordinarias del contrato de seguro.

### **II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

Me opongo a la prosperidad de las pretensiones formuladas en el escrito del llamamiento en garantía puesto que, si bien el mismo ya fue admitido, lo cierto es que la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507217000004, la cual opera en exceso de la primaria y la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507119000102 no podrán afectarse en el presente caso, toda vez que, no se ha realizado el riesgo asegurado en la misma. Además, tal como está demostrado en el plenario, a nuestro asegurado (**EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M S.A. EN REORGANIZACIÓN**) no es posible achacarle la responsabilidad del daño que se pretende indemnizar con esta acción de reparación directa, por cuanto, el demandante no logró probar la imputación como elemento constitutivo de la responsabilidad y se acreditó la culpa exclusiva y determinante de la víctima.

### **III. EXCEPCIONES FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

#### **1. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 1507217000004 Y LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES SERVICIO PÚBLICO No. 1507119000102**

Respecto al llamamiento en garantía se debe destacar como primera medida, que la responsabilidad de

mi prohijada solo puede verse comprometida ante el cumplimiento de la condición pactada, de la que pende el surgimiento de la obligación condicional, esto es la realización del riesgo asegurado, circunstancia que no se encuadra en el asunto pues se encuentra acreditado que los hechos se originaron debido a la culpa de la víctima Eduardo Edinson Bolivar Quimbaya quien conducía sin licencia, no respetó la señal de tránsito al pasar un semáforo en rojo y desconoció las precauciones exigidas por el Código de Tránsito relacionadas con la prelación de las vías.

Sobre la relevancia del objeto asegurado en el contrato de seguro, la Corte Suprema de Justicia – Sala Civil, Sentencia del 2 de mayo de 2000. Ref. Expediente: 6291. M.P: Jorge Santos Ballesteros; indicó lo siguiente:

Son la columna vertebral de la relación asegurativa y junto con las condiciones o cláusulas particulares del contrato de seguros conforman el contenido de este negocio jurídico, o sea el conjunto de disposiciones que integran y regulan la relación. Esas cláusulas generales, como su propio nombre lo indica, están llamadas a aplicarse a todos los contratos de un mismo tipo otorgados por el mismo asegurador o aún por los aseguradores del mismo mercado y están destinadas a delimitar de una parte la extensión del riesgo asumido por el asegurador de tal modo que guarde la debida equivalencia con la tarifa aplicable al respectivo seguro, definir la oportunidad y modo de ejercicio de los derechos y observancia de las obligaciones o cargas que de él dimanen.

Por lo tanto, se trata de una manifestación que enmarca las condiciones que regulan las obligaciones del asegurador, por lo que el juzgador debe ceñirse a lo expresamente enunciado en el condicionado del contrato de seguro. Vale la pena recordar al respecto, que el contrato de seguro contiene una obligación condicional a cargo del asegurador, (la de indemnizar), una vez ha ocurrido el riesgo que se ha asegurado (Arts. 1045, 1536 y 1054 del Código de Comercio). Por ello, el nacimiento de la indemnización pende, exclusivamente, de la realización del siniestro contractualmente asegurado, por lo cual, no cualquier acto o hecho tiene la propiedad de ser un acto asegurado, sino únicamente tienen esta característica aquellos actos y hechos que son expresamente pactados en la póliza del contrato de seguro.

Esto significa que la responsabilidad del asegurador se podría predicar solo cuando el suceso esté concebido en el ámbito de la cobertura del contrato, según su texto literal y por supuesto la obligación indemnizatoria o de reembolso a cargo de mi representada, en esta hipótesis, ha de sujetarse a lo convenido en la póliza y está limitada contractualmente a la suma asegurada sin perjuicio del deducible que es la porción que de cualquier siniestro le corresponde asumir a la entidad asegurada y sin perjuicio de la aplicación de las causales de exoneración o exclusión pactadas en el seguro.

En el presente caso, la responsabilidad de mi representada está supeditada al contenido de la póliza, sus diversas condiciones, al ámbito de amparo, a la definición contractual de su alcance o extensión, a los límites asegurados para cada riesgo tomado, a los riesgos asumidos por la convocada, a los valores asegurados para cada amparo, al deducible pactado etc., luego son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el asegurador y por eso el juzgador debe sujetar el pronunciamiento respecto de la relación sustancial que sirve de base para el llamamiento en garantía, al contenido del contexto de la correspondiente póliza. Para el caso concreto, la Póliza No. 1507217000004 tiene como objeto de amparo el siguiente:

“OBJETO DEL SEGURO: Se amparan los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, que el asegurado cause a terceros, con motivo de la responsabilidad civil en que incurra de acuerdo con la Ley, durante el giro normal de sus actividades, incluyendo las complementarias. Ampara

los daños morales (incluye perjuicios fisiológicos y daños a la vida en relación) derivados directamente de una lesión personal o daño material amparados por las pólizas. Lucro cesante derivado directamente de una lesión personal o daño material amparado por la póliza.”

En el presente asunto resulta indispensable precisar que la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507217000004 opera bajo la modalidad de exceso, de manera que su cobertura únicamente se activa una vez se haya agotado en su totalidad la póliza primaria de automóviles contratada por la entidad. En ese orden, antes de analizar la aplicabilidad de la póliza en exceso, corresponde verificar la cobertura de la Póliza de Automóviles No. 1507119000102, que es la que debe operar de manera principal.

Por su parte, y en lo que se refiere al caso, la Póliza No. 1507119000102, asegura al vehículo identificado con placas VCQ864, y respecto a terceros, cubre la responsabilidad civil extracontractual atribuible al asegurado, por daños a bienes de terceros, muerte o lesiones de una persona, y muerte o lesiones de dos o más personas.

INFORMACION DEL VEHICULO ASEGURADO			
CODIGO FASECOLDA : 05803995	PLACA: VCQ864	ACCESORIOS	
MARCA : MERCEDES BENZ	MOTOR: 906998U0745028	REFERENCIA	VALOR
LINEA : O500MA 1826	CHASIS: 9BM3821888B555693	NO AMPARADO	
TIPO : BUSES, BUSETAS Y MICROBUSES	COLOR: AZUL		
MODELO : 2008	DISP. SEGURIDAD Y LOCALIZACION		
CIUDAD DE CIRCULACION : CALI PAIS: COLOMBIA	CAZADOR: NO APLICA		
USO : URBANO	OTROS: NO APLICA		
SERVICIO : PUBLICO ESPECIAL			
VALOR ASEGURADO : 216.054.000			
VALOR A NUEVO : 216.054.000			

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	AMPARO	DEDUCIBLE
1. COBERTURA AL ASEGURADO			
1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	1.000,00 SMLV		10 % Min 1 (SMLV)
MUERTE O LESIONES A UNA PERSONA	1.000,00 SMLV		NO APLICA
MUERTE O LESIONES A DOS O MAS PERSONAS	1.000,00 SMLV		NO APLICA

Condiciones que nunca se cumplieron, por lo que no existe obligación indemnizatoria a cargo de mí representada, toda vez que no se realizó el riesgo asegurado en la **Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507119000102, cuya vigencia corrió desde el 4 de abril de 2019 hasta el 3 de enero de 2020.** En el expediente ciertamente no está demostrada la responsabilidad que pretende el extremo activo endilgar, toda vez que se configuró la culpa exclusiva de la víctima como causal de exoneración de la responsabilidad. Adicionalmente, para justificar sus pretensiones el grupo demandante no cuenta con pruebas fehacientes para determinar la causación de los supuestos daños materiales e inmateriales sufridos; ya que, por un lado, no acreditan de forma suficiente los ingresos con los que se realizó la liquidación del lucro cesante que pretenden reclamar, ni tampoco los gastos que se reclaman por concepto de daño emergente; y por otro, respecto a daños inmateriales, solicitan sumas excesivas respecto a los parámetros fijados por el Consejo de Estado.

Partiendo de los alegatos expuestos frente a la responsabilidad estatal endilgada, y atendiendo al acontecer fáctico del proceso, es dable concluir que, en este caso, no se estructuró la responsabilidad del asegurado. Así las cosas, **NO** se realizó alguno de los riesgos asegurados por mí representada y por ende no nació la obligación de indemnizar a cargo de ésta, de allí que, al no realizarse el riesgo asegurado (responsabilidad), se tiene que no se ha demostrado la ocurrencia del siniestro según el artículo 1072 del código de Comercio, en armonía con el artículo 1054 del mismo estatuto. Por lo tanto, la improbable obligación indemnizatoria de la aseguradora solo nace sí efectivamente se realiza el riesgo amparado en la póliza y no se configura ninguna de las causales de exclusión o de inoperancia del contrato de seguro, ya sea de origen convencional o legal.

En conclusión, las pólizas en comento no podrán ser afectada, en tanto no ha surgido la obligación condicional de la que pende para el surgimiento del deber indemnizatorio a cargo de mi representada, pues el siniestro, en los términos del artículo 1072 del Código de Comercio, es inexistente, toda vez que dentro del plenario quedó ampliamente demostrada la culpa exclusiva de la víctima, como constituyente de causa extraña que excluye la responsabilidad del asegurado.

En los anteriores términos solicito al señor Juez declarar probada esta excepción.

## 2. LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL 1507217000004 OPERA EN EXCESO

Sin que, con el planteamiento de esta excepción se esté reconociendo responsabilidad alguna por parte de mi representada, respecto a las coberturas de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 1507217000004; es necesario precisar, que únicamente opera en exceso de las pólizas primarias de responsabilidad civil extracontractual de las pólizas de los automóviles.

En exceso de

1. Las pólizas primarias de Responsabilidad Civil Extracontractual de las pólizas de automóviles que vienen con un límite de 1.000/1.000/1.000 SMMLV hasta el monto de la cobertura (1 SMMLV = COP781.242) por vehículo

2. Las pólizas primarias de Responsabilidad Civil Contractual de las pólizas de automóviles que vienen con un límite de:

200 SMMLV (1 SMMLV = COP781.242) por pasajero

Es decir, en el caso concreto, esta póliza únicamente se afectaría en exceso de la Póliza De Automóviles Servicio Público No. 1507119000102 que es la principal del vehículo que se encuentra vinculado al accidente de tránsito que motiva este medio de control.

## 3. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGUROS.

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado. Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización. Es decir, no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

“Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.”

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio establece lo siguiente: **“Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él**

**fuerza de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso”** (Negrilla fuera de texto).

Así las cosas, no debe perderse de vista que las solicitudes deprecadas en el escrito de demanda por concepto de perjuicios inmateriales y materiales no son de recibo por cuanto su reconocimiento por parte de la EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M., implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro. Lo anterior, puesto que se enriquecería la parte demandante recibiendo una indemnización por parte del ente territorial que nada tuvo que ver con la configuración del daño que se reclama. Adicionalmente, no habría lugar al reconocimiento de estos conceptos, dado que, como se ha venido reiterando a lo largo del escrito, se configuró la culpa exclusiva de la víctima como causal de exoneración de la responsabilidad que se pretende predicar contra la entidad demandada.

Conforme a ello, dado que los perjuicios solicitados en el *petitum* de la demanda presentan serias inconsistencias, reconocer el pago de suma alguna con cargo a la póliza de seguro, implicaría correlativamente transgredir el carácter meramente indemnizatorio que revisten los contratos de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado, y eventualmente enriqueciéndola.

En conclusión, no puede perderse de vista que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo atiende a un carácter meramente indemnizatorio. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la indebida solicitud y tasación de perjuicios, se deberá declarar probada la presente excepción, y así evitar la contravención del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y un correlativo enriquecimiento sin justa causa en cabeza del extremo activo.

En los anteriores términos ruego declarar probada esta excepción.

#### **4. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO.**

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que la Póliza que hoy nos ocupa sí presta cobertura para los hechos objeto de este litigio, que sí se realizó el riesgo asegurado y que, en este sentido, sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de la compañía; exclusivamente bajo esta hipótesis, el operador judicial deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada: **“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”**.

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia, ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, **el valor de la prestación a cargo de la aseguradora**, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, **se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado**, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización<sup>19</sup> (Subrayado y negrilla fuera de texto original).

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda en razón de la porción del riesgo asumido, que en este caso resulta ser una suma ascendente a 1000 SMLMV.

Por su parte, la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507217000004, opera bajo la modalidad de exceso, de manera que su cobertura únicamente se activa una vez se haya agotado en su totalidad la póliza primaria de automóviles contratada por la entidad, por lo que no podrá afectarse.

Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al honorable despacho tomar en consideración que, sin perjuicio que en el caso bajo análisis no se ha realizado el riesgo asegurado y que el contrato de seguro no presta cobertura por las razones previamente anotadas, en todo caso, dicha póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

## **5. LAS EXCLUSIONES DE AMPARO CONCERTADAS EN LA POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 1507217000004**

La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507217000004 no presta cobertura en los siguientes eventos: “ 2.1.1 *La responsabilidad civil proveniente de dolo o culpa grave, del asegurado.* 2.1.12. *Daños a causa de la inobservancia de disposiciones legales y de la autoridad o de instrucciones y estipulaciones contractuales, a no ser que ni el asegurado ni personas con funciones directivas hayan actuado dolosamente ni haya permitido una actuación dolosa de los demás empleados*”, entre otras, por lo que en el eventual caso que se lleguen a acreditar estas circunstancias, no podrá el despacho ningún argumento fáctico o jurídico afectar el contrato de seguro anteriormente comentado.

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que no se amparan dentro del contrato de seguro, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la Póliza. En tal sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, mediante sentencia del 27 de mayo de 2020, se refirió a las exclusiones de la

<sup>19</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. M<sup>o</sup> Jorge Antonio Castillo Rugeles. EXP 5952.

siguiente manera:

“Lo anterior, se reitera, en la medida en que si bien desde la perspectiva de la normativa aplicable se cumplieron las condiciones generales de la póliza de seguros para que Seguros del Estado S.A. respondiera por el daño atribuido a la I.P.S. Universitaria de Antioquia, el juez en la valoración probatoria debió revisar si en el caso bajo examen se configuraba alguna de las exclusiones de responsabilidad fijadas contractualmente, en los términos señalados en el numeral 29 del referido contrato de seguro”<sup>20</sup>.

Así las cosas, se evidencia cómo por parte del Órgano de Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se exhorta para tener en cuenta las exclusiones contenidas en los contratos de seguro.

En el presente asunto, la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507217000004 contiene una serie de exclusiones contenidas en las condiciones Generales de la Póliza, que de configurarse cualquiera de ellas en el presente caso, exonerarán de responsabilidad a mi prohijada, entre las que se encuentran las siguientes:

- 2.1.1. La responsabilidad civil proveniente de dolo o culpa grave, del asegurado.
- 2.1.12 Daños a causa de la inobservancia de disposiciones legales y de la autoridad o de instrucciones y estipulaciones contractuales, a no ser que ni el asegurado ni personas con funciones directivas hayan actuado dolosamente ni haya permitido una actuación dolosa de los demás empleados.

Bajo la anterior premisa, en caso de configurarse alguna de las exclusiones que constan en las condiciones generales y particulares de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507217000004, éstas deberán ser aplicadas y deberán dársele los efectos señalados por la jurisprudencia. En consecuencia, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador como quiera que se convino libre y expresamente que tal riesgo no estaba asegurado.

## **6. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO.**

Sin que con el planteamiento de esta excepción se esté aceptando responsabilidad alguna por parte de mi representada, es pertinente manifestar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado de una póliza se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos, dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que, si para la fecha de la sentencia y ante una condena, se ha agotado totalmente el valor asegurado, no habrá lugar a obligación indemnizatoria por parte de mi prohijada.

En los anteriores términos, solicito respetuosamente al señor Juez, declarar probada esta excepción.

## **7. EXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A Y LOS DEMANDADOS**

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está

<sup>20</sup> Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez de fecha 27 de mayo de 2020.

contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

Es importante recabar sobre el particular por cuanto a que la obligación de mí representada tiene su génesis en un contrato de seguro celebrado dentro de unos parámetros y límites propios de la autonomía de la voluntad privada y no de la existencia de responsabilidad civil extracontractual propia de la aseguradora, sino de la que se pudiere atribuir al asegurado conforme lo establecido por el artículo 2341 del Código Civil, por tanto se encuentra frente a dos responsabilidades diferentes a saber: 1. La del asegurado por la responsabilidad civil extracontractual que se le llegará a atribuir, cuya fuente de obligación indemnizatoria emana de la ley propia y 2. La de mí representada aseguradora cuyas obligaciones no emanan de la ley propiamente dicha, sino de la existencia de un contrato de seguro celebrado dentro de los parámetros dados por los artículos 1036 del Código de Comercio y S.S., encontrándose las obligaciones de mí representada debidamente delimitadas por las condiciones pactadas en el contrato de seguro celebrado, constituyéndose entonces las obligaciones del asegurado y de la aseguradora en obligaciones independientes y que no son solidarias.

La Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y mediante ponencia del Dr. Ariel Salazar Ramírez en sentencia SC20950-2017 Radicación n° 05001-31-03-005-2008- 00497-01 ha indicado que: *“(...) Por último, la compañía aseguradora no está llamada a responder de forma solidaria por la condena impuesta, sino atendiendo que «el deber de indemnizar se deriva de una relación contractual, que favoreció la acción directa por parte del demandante en los términos del artículo 1134 del C. de Co (...)”*

Entendido lo anterior, es preciso indicar que la solidaridad de las obligaciones en Colombia solo se origina por pacto que expresamente la convenga entre los contrayentes, lo anterior según el art. 1568 del Código Civil Colombiano que reza:

*“(...) En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley.”*

En virtud de tal independencia en las obligaciones, se formula esta excepción por cuanto el artículo 1044 del Código de Comercio faculta a la aseguradora proponer al tercero beneficiario las excepciones y exclusiones que pudiere interponerle al asegurado o tomador del contrato de seguro, motivo por el cual puede alegar mí representada la ausencia de cobertura ante la falta de prueba de la ocurrencia y cuantía del siniestro y las exclusiones y demás condiciones que resultaren atribuibles al presente evento.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado con sujeción a las condiciones de la póliza.

Respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

## **8. PAGO POR REEMBOLSO.**

Sin perjuicio de reconocimiento de responsabilidad por parte de nuestro asegurado, en el remoto e hipotético caso en que se produzca una sentencia condenatoria y se decida afectar el contrato de seguro,

la compañía aseguradora solo estaría en la obligación de responder bajo la figura del reembolso, teniendo en cuenta que la EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M, es el tomador de la Póliza. Por tal motivo, una vez el asegurado, proceda con el pago a los demandantes, de allí se desprendería la obligación de la compañía de reembolsarle lo pagado, atendiendo las particularidades de la póliza, en especial, el límite y sublímite asegurado y el deducible pactado.

## 9. GENÉRICA O INNOMINADA.

Solicito señor juez declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, que se encuentre originada en la Ley o en el contrato por el cual se convocó a mi representada, incluida la de la prescripción del contrato de seguro. Lo anterior, conforme a lo estipulado en el inciso segundo del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establece:

“(…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y **sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada**. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.”  
(subrayado y negritas propias).

En ese sentido, cualquier hecho que dentro del proceso constituya una excepción deberá reconocerse de manera oficiosa en la sentencia que defina el mérito.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción

## CAPÍTULO V. OPOSICIÓN PROBATORIA

### 1. INTERVENCIÓN EN LAS PRUEBAS DOCUMENTALES Y TESTIMONIOS

Con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas documentales al proceso y participar en la práctica de las testimoniales e interrogatorio de parte que lleguen a ser decretadas, intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas en la demanda y en la contestación a la demanda.

### 2. FRENTE A LA SOLICITUD DE DECRETO DE PRUEBA PERICIALES

Me opongo a la solicitud de decreto de las pruebas periciales formuladas por la parte actora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 226 y siguientes del Código General del Proceso, en concordancia con lo previsto en el artículo 167 ibídem sobre la carga de la prueba, y en los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad de los medios probatorios.

- **En primer lugar, la valoración psicológica solicitada ante Medicina Legal** carece de pertinencia y conducencia, por cuanto el daño cuya reparación se pretende en el presente proceso debe estar acreditado con pruebas oportunamente allegadas dentro de la etapa procesal correspondiente de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011. Por lo anterior, no resulta procedente que se ordene ahora la práctica de una pericia que busca suplir la ausencia de prueba del daño al momento de presentar la demanda, más aún cuando no se acreditó ninguna imposibilidad que impidiera la consecución de dicha valoración al momento de presentar la demanda.

- **En segundo lugar, frente al peritaje de reconstrucción del accidente de tránsito**, resulta improcedente por falta de utilidad, toda vez que a la fecha han transcurrido más de un (5) años desde la ocurrencia de los hechos, lo que implica que las condiciones del lugar (señalización, estado de la vía, tránsito vehicular, entorno urbano) ya no corresponden a las existentes el día del accidente. En consecuencia, el dictamen que se llegare a practicar no reflejaría de manera confiable las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se buscan esclarecer, de modo que no constituye un medio idóneo ni eficaz para aportar claridad probatoria.
- **En tercer lugar, la valoración de pérdida de capacidad laboral** solicitada ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca tampoco resulta procedente, por cuanto el daño cuya reparación se pretende en el presente proceso debe estar acreditado con pruebas oportunamente allegadas dentro de la etapa procesal correspondiente de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011. Por lo anterior, no resulta procedente que se ordene ahora la práctica de una pericia que busca suplir la ausencia de prueba del daño al momento de presentar la demanda, más aún cuando no se acreditó ninguna imposibilidad que impidiera la consecución de dicha valoración al momento de presentar la demanda.

### **3. FRENTE AL INTERROGATORIO DEL SECRETARIO DISTRITAL DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI**

Me opongo al decreto del interrogatorio del Secretario Distrital de Movilidad de Santiago de Cali con sustento en lo preceptuado en el artículo 275 del Código General del Proceso que establece que *“No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas”*, contenido que es aplicable al caso por remisión expresa del artículo del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011. Por lo anterior señor juez, solicito se rechace esta prueba por inconducente.

### **CAPÍTULO VI. PRUEBAS**

#### • **DOCUMENTALES**

1. Poder general que me faculta para actuar como apoderado de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
2. Certificado de existencia y representación legal de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
3. Copia de la carátula y condicionado particular de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507217000004, cuyo asegurado es la EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M S.A EN REORGANIZACIÓN.
4. Copia de la carátula y condicionado particular de la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507119000102, cuyo asegurado es la EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO E.T.M S.A EN REORGANIZACIÓN

## INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito respetuosamente se sirva citar a la audiencia de pruebas respectiva al señor EDUARDO EDINSON BOLIVAR QUIMBAYA por conducto de su apoderado, con la intención de que den respuesta a un cuestionario que le formularé verbalmente en la diligencia, con relación a las situaciones de hecho que motivaron la presente demanda.

## TESTIMONIALES

- Solicito respetuosamente se sirva citar a la audiencia de pruebas respectiva al señor CARLOS ALBERTO REBELLÓN CALDERÓN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.452.345, conductor del vehículo de transporte público de placas VCQ 864, dirección Carrera 28F 1 #121 -35 de Cali, con la intención de que den respuesta a un cuestionario que le formularé verbalmente en la diligencia, con relación a las situaciones de hecho que motivaron la presente demanda.

## CONTRADICCIÓN DE DICTÁMEN PERICIAL

Con la reforma de la demanda, la parte actora peritaje del accidente de tránsito, elaborado por el perito ROGER KEVIN PALACIO DEVIA Identificado con C.C. 1.069.177.742, por lo cual solicito al honorable juez que cite al mencionado por conducto del apoderado de la parte actora, con el fin de realizar la correspondiente contradicción del dictamen pericial.

## OFICIO

Respetuosamente solicito se oficie a **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, con el fin de que con destino a este proceso remita la certificación de la disponibilidad del valor asegurado de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507217000004; cuya vigencia corrió desde el 3 de enero de 2019 hasta el 3 de enero de 2020 y Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507119000102; cuya vigencia corrió desde el 4 de enero de 2019 hasta el 3 de enero de 2020. Esto teniendo en cuenta que, de conformidad con los artículos 1079 y 1111 del Código de Comercio, mi representada no está obligadas a responder si no hasta la concurrencia de la suma asegurada y ésta se entenderá reducida desde el momento del siniestro en el importe de la indemnización pagada por el asegurador.

## CAPÍTULO VII. NOTIFICACIONES

Mi representada y el suscrito recibiremos notificaciones físicas en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212 de la ciudad de Cali, o en la Secretaría de su Despacho. Correo electrónico: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

Cordialmente,



**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.